

**Informe sobre los Derechos Humanos en la  
REPUBLICA DOMINICANA, 2005**  
Departamento de Estado de los Estados Unidos  
(Publicado marzo, 2006)

La República Dominicana es una democracia constitucional representativa con una población de aproximadamente unos 8.8 millones de habitantes, incluyendo a cerca de 650 mil haitianos indocumentados. En agosto del 2004 el Presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue reelecto en unas elecciones consideradas libres y justas. A pesar de que en sentido general las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo de las fuerzas de seguridad, hubo algunos casos donde elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente de la autoridad del gobierno.

El record del gobierno en cuanto a los derechos humanos siguió siendo deficiente. Aunque se logró mejorar ciertas áreas, persistieron problemas graves. Se reportaron los siguientes problemas de derechos humanos:

- Asesinatos injustificados cometidos por fuerzas de seguridad
- Torturas, golpizas, y otros abusos contra sospechosos, detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad
- Condiciones carcelarias desde deficientes hasta precarias
- Arrestos arbitrarios y detenciones injustificadas de sospechosos
- Detenciones largas antes del juicio y atrasos excesivos en la celebración de juicios
- Auto-censura practicada por periodistas y directores de medios
- Restricción de movimiento y expulsión arbitraria de inmigrantes haitianos y domínico-haitianos
- Violencia y discriminación contra la mujer
- Prostitución infantil y otros abusos contra menores
- Discriminación severa y abuso contra inmigrantes haitianos y sus descendientes.
- Tráfico/trata de humanos
- Trabajo forzado
- Restricciones de la libertad de asociación/organización y condiciones laborales inseguras
- Mano de obra infantil en el sector informal

El gobierno logró algunos avances en el mejoramiento del respeto a los derechos humanos. Un nuevo Código Procesal Penal y un nuevo Código de Menores ofrecen a los sospechosos protecciones adicionales pero también sanciones más duras en casos de explotación sexual o comercial. El gobierno mejoró su capacidad de luchar contra la trata de personas, de proporcionar asistencia a las víctimas, y aumentar las investigaciones contra traficantes.

## **RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS**

Sección 1 Respeto a la Integridad de la Persona, incluyendo la Libertad Contra:

- a. Despojo Arbitrario o Ilegítimo de la Vida

Aunque el gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato por motivaciones políticas, fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en muchos asesinatos que eran ilegales, injustificados o que involucraban el uso excesivo de la fuerza.

Según la Procuraduría General de la República, las fuerzas de seguridad asesinaron entre 400 y 440 personas durante el año. La Policía Nacional reportó unas 371 muertes a manos de la policía entre enero y septiembre, un promedio de 41 por mes. Sin embargo, el número de dichas muertes se redujo durante el segundo semestre del año, bajo la administración de un nuevo jefe de la policía, hasta una cifra mensual de 14 en diciembre. En la mayoría de los asesinatos a manos de la policía, ésta declaraba que las muertes eran el resultado de intercambios de disparos en el curso de una detención, lo que obligó a los oficiales a actuar en defensa propia. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchos asesinatos estuvieron relacionados a tácticas agresivas por parte de la policía.

Organizaciones de los derechos humanos declararon que la policía empleaba fuerza mortal injustificada contra sospechosos criminales igual que en años anteriores, y el ajusticiamiento uniformado persistía a un nivel menos-que-mortal (ver sección 1.c.). En varios casos la falta de investigadores calificados y la no-transparencia de las investigaciones de muertes en “intercambios de disparos” terminaron en la impunidad. Sin embargo, a finales del año un nuevo jefe de la policía instituyó una revisión formal obligatoria cuando un miembro de la policía estuviera involucrado en una muerte a tiros.

Muchos casos que fueron referidos a los tribunales para fines de investigación permanecieron sin resolver o resultaron en la liberación del acusado. No hubo ningún registro de ninguna investigación por parte de la Suprema Corte por la puesta en libertad por orden judicial del oficial de la policía Cristino Alvarez Ventura, quien le disparó y mató a un joven en el 2003.

En octubre un tribunal sentenció a los antiguos sargentos de la policía Rafael Matos Feliz, Homero Zapata y el Teniente Cristian Feliz Gómez a 20, 10 y 3 años de prisión, respectivamente, por el asesinato en el 2002 de un estudiante universitario donde los oficiales alegaban que ellos pensaban que se trataba de un delincuente.

El Teniente de la Policía Juan Bautista Berroa fue apresado por un asesinato injustificado en el 2002 en San Francisco de Macorís. Su juicio fue aplazado varias veces, más recientemente para febrero del 2006.

Hubo un número significativo de muertes en casos de personas que estaban bajo custodia, debido a la negligencia de las autoridades carcelarias (ver la sección 1.c.).

Hubo reportes de violencia por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, contra personas que realizaban protestas, incluyendo algunas muertes (ver la sección 2.b.).

En varias ocasiones ciudadanos atacaron a haitianos en represalias por crímenes alegadamente cometidos por otros haitianos. En algunos casos los haitianos atacados fueron asesinados.

En agosto en Haina, en las afueras de Santo Domingo, personas borrachas intentaron un atraco en altas horas de la noche, lo cual se convirtió en un ataque violento donde varios dominicanos golpearon a cuatro haitianos, luego les rociaron un líquido inflamable, y les prendieron fuego. Murieron tres, y el cuarto huyó con quemaduras severas. Una comisión especial de la Policía Nacional investigó el caso.

En diciembre en Villa Trina un grupo de haitianos mató a un dominicano quien según ellos les había estado atacando. Posteriormente, dominicanos no-identificados mataron a un hombre haitiano, hirieron a otros, y quemaron varias viviendas de haitianos.

#### b. Desaparición

No hubo reportes de desapariciones políticamente motivadas.

No hubo avances en el caso de Narciso González, un profesor universitario y crítico del gobierno de Balaguer y quien desapareció en el 1994.

#### c. Tortura y Otro Tratamiento o Castigo Cruel, Inhumano o Degradante

Aunque la ley prohíbe dichas prácticas, el personal de las fuerzas de seguridad, principalmente miembros de niveles medio y bajo de la policía, seguían torturando, golpeando e infligiendo otros abusos físicos a los detenidos y presos.

La ley dispone penas por la tortura y el abuso físico, incluyendo sentencias de 10 a 15 años de prisión. Los fiscales civiles a veces presentaron cargos contra oficiales policiales y militares, alegando tortura, abuso físico y crímenes relacionados. Nuevos casos de abuso y tortura fueron enviados a los tribunales penales civiles cuando se presentaban; a veces oficiales de nivel medio objetaban la jurisdicción civil (ver la sección 1.e.).

Oficiales superiores de la policía tomaron en serio la prohibición contra la tortura y el abuso físico, pero una falta de supervisión, entrenamiento y rendimiento de cuentas a nivel de los sistemas de fuerza pública y correccionales socavaban los esfuerzos por frenar el problema. Grupos de los derechos humanos reportaron repetidos casos de abuso físico de detenidos, incluyendo varias formas de tortura, golpizas y abuso sexual.

Según las organizaciones de derechos humanos, tanto la Policía Nacional como funcionarios carcelarios utilizaron formas de tortura. El método más frecuente era la golpiza. Las organizaciones de derechos humanos también reportaron como forma de tortura la asfixia con fundas plásticas para sacar confesiones.

Según la Comisión Nacional sobre los Derechos Humanos, oficiales militares y policiales supuestamente hostigaban, golpeaban y deportaban al azar a haitianos que vivían en los pueblos fronterizos de Pedernales y Elías Piña (ver la sección 2.d.).

Abogados de la Fiscalía del Distrito Nacional monitorearon el proceso de investigación para garantizar el respeto de los derechos de los detenidos en destacamentos policiales de alto

volumen de tráfico, y en varias oficinas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) (ver la sección 1.d.). Hubo alguna evidencia de que asistentes de fiscales a veces eran complacientes en cuanto a prácticas policiales tradicionales en vez de intentar elevar estas prácticas a normas constitucionales. Sin embargo, con la implementación del nuevo Código Procesal Penal en septiembre del 2004, los detenidos recibían protecciones adicionales, y se mejoró el respeto a los derechos de los detenidos, incluyendo un aumento en el cumplimiento de los límites de tiempo para la detención previa a juicio (ver la sección 1.d.).

Tanto la Policía Nacional como las fuerzas armadas ofrecieron cursos de entrenamiento en derechos humanos (ver la sección 1.d.).

### Condiciones de Prisiones/Cárceles y Centros de Detención

Las condiciones carcelarias variaban de pobres a graves. Los reportes de tortura y maltrato en las prisiones eran comunes. Las prisiones estaban excesivamente sobre-pobladas, las condiciones de salud y sanidad eran pobres, y algunas prisiones escapaban del control de las autoridades. Las asignaciones presupuestarias para los elementos necesarios tales como alimentos, medicamentos y transporte eran insuficientes. La mayoría de los reclusos rogaban, o les compraban comida a personas en los alrededores de la prisión, o la obtenían a través de familiares. A los presos no los llevaban a sus audiencias a menos que sobornaran a los guardianes (ver las secciones 1.d. y 1.e.), y los visitantes muchas veces se veían obligados a sobornar a los guardianes de la prisión para poder visitar a los reclusos. Los funcionarios carcelarios aceptaban dinero a cambio de una recomendación para que un preso fuera puesto en libertad bajo fianza, o liberado por motivos de salud. Muchas veces las prisiones no proporcionaban cuidados médicos adecuados a los reclusos. Los presos inmovilizados por SIDA, o que sufrían de enfermedades terminales no eran transferidos a los hospitales.

Según la Dirección de Prisiones, la policía y los militares tenían aproximadamente unos trece mil presos y detenidos en 35 prisiones, de una capacidad nominal de aproximadamente nueve mil. Virtualmente todas las prisiones estaban extremadamente sobre-congestionadas. La cárcel de la Victoria, la más grande del país, tenía más de 3,500 presos en facilidades diseñadas para mil presos, y contaba solamente con 354 camas para sus reclusos. La cárcel de Rafey tenía aproximadamente 1,200 reclusos en facilidades diseñadas para acoger a 600.

Aunque un guardián que se reporta con el Procurador General de la República era el responsable de manejar cada cárcel, en la práctica, un policía o un oficial militar (generalmente designado por un período de solamente de tres a seis meses, y responsable de brindar seguridad) normalmente estaba a cargo de la prisión. El hacinamiento era tan grave que algunas cárceles estaban totalmente fuera del control de las autoridades, y en efecto estaban siendo operadas por pandillas y reclusos armados.

La prensa y los grupos de derechos humanos reportaron un amplio tráfico de narcóticos y armas dentro de las cárceles, además de la prostitución y el abuso sexual, incluyendo el abuso de menores.

Hubo varias muertes debido a la negligencia en las prisiones. Durante un motín en marzo, pandillas armadas rivales lucharon por el control de una sección de la cárcel de Higüey, llamada Vietnam. Durante la pelea los reclusos prendieron fuego a una celda. Se murieron por lo menos 136 presos, y 26 quedaron heridos. Según la Policía Nacional, los bomberos no pudieron llegar hasta los presos a tiempo porque los presos habían trabado las cerraduras con arena y otros desechos. Mientras que la cárcel de Higüey fue construida para 80 reclusos, el director de la prisión reportó que tenía 426 reclusos al momento del incendio. La celda que se quemó, diseñada para no más de 40 personas, tenía más de 150 reclusos. La mayoría de las personas que se murieron en el incendio estaban bajo prisión preventiva. Los funcionarios del gobierno anunciaron que las autoridades presentarían cargos de asesinato contra presos y oficiales de fuerza pública que estuvieran involucrados, y apresaron a cinco reclusos que esperaban su juicio a finales del año.

Aunque en sentido general las reclusas estaban separadas de los reclusos, hubo algunos casos donde los presos y las presas estaban juntos. La mitad de la población femenina total era mantenida en una cárcel para mujeres solamente. Las condiciones en las alas para mujeres generalmente eran mejores que las condiciones en las alas usadas para los reclusos varones. Hubo algunos reportes de guardias que abusaban física y sexualmente de las reclusas. A las mujeres reclusas, a diferencia de sus contrapartes masculinos, se les prohibía recibir visitas conyugales. A aquellas que daban a luz mientras estuvieran en prisión se les permitía mantener a sus bebés consigo durante un año.

Muchas veces había detenidos jóvenes entre la población general de la prisión. A veces las autoridades trataban a los menores como adultos, y los mantenían encarcelados en la prisión, en vez de centros de detención juveniles.

Los presos preventivos muchas veces estaban encarcelados con presos convictos. Los presos no estaban separados según el crimen dentro de la población carcelaria; sin embargo, podrían ser recluidos en confinamiento solitario por disturbios durante su encarcelamiento.

El gobierno permitió que observadores independientes de los derechos humanos y de los medios de comunicación, visitaran las prisiones durante el año.

#### d. Apresamiento o Detención Arbitraria

Aunque el Código Procesal Penal implementado en septiembre del 2004 prohíbe la detención sin una orden a menos que el sospechoso sea sorprendido en el acto o en otras circunstancias limitadas, el arresto y la detención arbitraria continuó siendo un problema.

#### Papel del Cuerpo Policial y de Seguridad

La Policía Nacional, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la DNCD, la Autoridad/Consejo de Seguridad Aeroportuaria (CESA), la Autoridad/Consejo de Seguridad Portuaria (CESEP), y las fuerzas armadas (ejército, fuerza aérea y marina de guerra) constituyen las fuerzas de seguridad. La Secretaría de Interior y Policía es responsable de tomar decisiones de política que afecten la fuerza policial. Las responsabilidades domésticas de los militares incluyen la preservación del orden público y la protección de personas y propiedades. Los

militares, el CESA y el CESEP están bajo el secretario de las fuerzas armadas; y la DNI y la DNCD, que cuentan con personal tanto de la policía como de militares, se reportan directamente al Presidente.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, militares y policías colaboraban con sus homólogos haitianos en la frontera para exigir sobornos a los haitianos que intentaban cruzar ilegalmente.

El Centro de Prevención de Abuso Policial (CEPRAPO) reportó a la Oficina de Asuntos Internos de la Policía más de 40 casos de abuso policial. Según CEPRAPO, la policía respondió oficialmente a solamente dos de estos casos.

Agentes de la policía han sido despedidos por haber cometido violentos ataques, extorsión, uso de narcóticos y tráfico de estupefacientes. Continuaban los problemas de esta naturaleza, en parte debido a una insuficiente depuración de los antecedentes de los policías reclutas. Muchas personas con antecedentes criminales alegadamente fueron integradas a las filas de la policía, ya sea bajo nombres falsos o con identificación o recomendaciones de otras instituciones del estado, tales como el ejército. Muchos miembros de la policía carecían de educación básica, habían recibido un entrenamiento inadecuado, y demostraban una disciplina débil, factores todos que contribuían directamente a asesinatos ilegales o injustificados y a tratamiento cruel o inhumano (ver la sección 1.a.).

El Instituto de Dignidad Humana, rama de la Policía Nacional, monitorea los abusos de derechos humanos cometidos por miembros de la Policía Nacional. El instituto celebró más de 100 cursos, seminarios y conferencias, a los cuales asistieron miembros de la Policía Nacional, fuerzas armadas, y civiles. De enero a septiembre más de 1,500 participantes se graduaron del curso sobre dignidad humana que ofrece la policía.

El entrenamiento para el personal alistado y oficiales militares y de la DNCD incluyó educación sobre los derechos humanos. El Instituto Militar de Derechos Humanos ofreció cursos diplomados en derechos humanos, y con regularidad enviaba a representantes a las unidades fronterizas para impartir entrenamiento obligatorio en derechos humanos. Casi siete mil participantes de la sociedad civil y militar recibieron entrenamiento durante el año.

Los sistemas para monitorear y sancionar abusos de derechos humanos seguían siendo ineficientes.

### Arresto y Detención

La ley dispone que un acusado pueda quedar detenido durante 48 horas antes de ser presentado ante las autoridades judiciales. También dispone un recurso a procesos de *habeas corpus* para solicitar la liberación de los que están detenidos ilegalmente; sin embargo, a veces la policía violaba las disposiciones constitucionales y legales deteniendo a sospechosos para fines de investigación o interrogatorio sin una orden. Muchas veces la policía detenía a todos los sospechosos y testigos de un crimen y utilizaba el proceso investigativo para determinar quiénes

eran inocentes y merecían ser puestos en libertad, y quiénes debían seguir bajo arresto. Además, la policía seguía deteniendo a parientes y amigos de los sospechosos para presionar a éstos a que se entregaran o hicieran confesiones. Estas prácticas fueron empleadas con menos frecuencia después de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.

En vista de la ineficiencia histórica de los tribunales (ver la sección 1.e.), la concesión de libertad bajo fianza servía como un sistema penal de hecho, y las partes demandadas a quienes se les concedía libertad bajo fianza raras veces eran efectivamente enjuiciados. A pocos acusados se les concedía libertad bajo fianza, aunque ésta se hizo más común después de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que exige una revisión judicial de las detenciones en una etapa más temprana en un caso penal.

La mayoría de los detenidos y presos no tenían acceso inmediato a un abogado ni podían darse el lujo de obtener servicios adecuados de defensa. La Oficina Nacional de Defensoría Judicial, con apoyo de donantes extranjeros, brindaba asesoría y representación legales a personas indigentes. Para octubre el programa del gobierno de entrenar a los defensores públicos había colocado a unos 80 defensores públicos en Santo Domingo, Santiago y algunas zonas más pequeñas. La Suprema Corte también pagó a 97 abogados privados a nivel nacional para brindar servicios legales de tiempo parcial a los demandados indigentes.

La policía continuaba la práctica de hacer redadas esporádicas en comunidades de bajos ingresos y altos niveles de criminalidad donde arrestaban y detenían a personas sin orden de arresto, alegadamente para combatir la delincuencia. Durante estas redadas, la policía arrestaba a elevados números de residentes y confiscaba bienes, incluyendo motocicletas, otros vehículos, y armas. Generalmente los fiscales no investigaban los casos de manera activa; muchas veces dependían de los reportes policiales, muchos de los cuales se basaban en confesiones forzadas.

Observadores dominicanos de los derechos humanos reportaban redadas de obreros haitianos y dominico-haitianos de la construcción. Oficiales alegadamente tomaban grupos de individuos de tez oscura o que “parecían haitianos” a edificios vacíos poco después que habían sido pagados, para extorsionarles dinero.

No hubo reportes de presos políticos.

Muchos sospechosos sufrían una detención larga antes del juicio. Según varios reportes, el 66 por ciento de los reclusos fueron detenidos sin cargos o estaban esperando el juicio. El promedio para la detención antes de juicio era más de seis meses. El tiempo transcurrido en detención previa al juicio contaba para una sentencia.

Los jóvenes reclusos en el Departamento de Menores en el destacamento de la policía en Villa Juana frecuentemente eran retenidos mucho más allá del límite de 12 horas hasta que el caso fuera enviado la fiscalía del distrito. La ley prohíbe la interrogación de menores por parte de la policía o en la presencia de la policía; los fiscales y jueces manejan el interrogatorio.

La falta de parte de las autoridades carcelarias de entregar al acusado para audiencias judiciales causó un porcentaje significativo de aplazamientos de juicios (ver la sección 1.e.). Además, a los

reclusos muchas veces se les aplazaban las fechas de sus juicios porque sus abogados o testigos no comparecían. Las autoridades mantenían presos a algunos reclusos aún cuando no existían cargos formales en su contra.

Un largo atraso de casos penales bajo el antiguo Código Procesal Penal permanecía vigente en el Distrito Nacional y a nivel nacional. Los planes de la Suprema Corte de descongestionar la agenda de los tribunales proseguían lentamente debido a restricciones presupuestarias. Las agendas estaban llenas de infracciones de tránsito que, por ley, debían conocerse en los tribunales de tránsito; estos tribunales no han sido creados debido a la falta de fondos. Otras complicaciones en la eliminación de la acumulación atrasada surgieron por falta de fondos para transportar a los reclusos a la corte. Muchos casos fueron reprogramados cuando el acusado o testigos claves no comparecían. En algunos casos un acusado aparecía ante el juez en una fecha programada para el juicio, pero el juicio no podía continuar debido a la ausencia de uno o más de los co-acusados. La decisión del juez de negarse a conocer por separado los casos de co-acusados perjudicaba a los acusados que cumplían la ley.

#### e. Imposibilidad de un Juicio Público Justo

Aunque la ley dispone una judicatura independiente, entidades públicas y privadas continuaban socavando la independencia judicial. La judicatura recibió entrenamiento en el Código Procesal Penal para ayudar a crear y mantener estándares profesionales, pero el tráfico de influencia continuó siendo un problema.

La judicatura incluye una Suprema Corte con 16 miembros, una corte de apelación, tribunales de primera instancia, y jueces de paz. Hay tribunales especializados que manejan asuntos fiscales, laborales, de tierra y de menores. La Suprema Corte es responsable de designar a todos los jueces de los tribunales inferiores según los criterios definidos por ley. El gobierno creó 17 de los 25 tribunales dispuestos por ley, y 5 cortes de apelación para niños y adolescentes. El Código de Menores fija el sistema judicial para casos penales que involucran a menores y disputas familiares.

#### Procedimientos Judiciales

La ley dispone una presunción de inocencia, el derecho a la apelación, y el derecho de confrontar o interrogar a testigos. La ley establece el derecho del ciudadano a no ser despojado de su libertad sin juicio o formalidades legales, o por motivos que no sean los dispuestos por ley; el derecho a no servir como testigo en su propia contra; y el derecho a una defensa en un juicio imparcial y público. Las autoridades han violado estos derechos con mucha frecuencia.

Los ciudadanos gozan del recurso de amparo, una acción para buscar compensación por cualquier violación de un derecho constitucional, incluyendo violaciones por parte de oficiales judiciales. Dicho remedio fue utilizado raras veces, con la excepción de aquellos con asesoría legal sofisticada.

Hasta recientemente, los tribunales militares y policiales disfrutaban de jurisdicción exclusiva sobre casos que involucraban a miembros de las fuerzas de seguridad; sin embargo, algunos

casos de asesinatos cometidos durante el año, alegadamente por miembros de las fuerzas de seguridad, fueron enviados a los tribunales penales civiles (ver la sección 1.a.).

#### Presos Políticos

No hubo reportes de presos políticos.

#### f. Ingerencia Arbitraria en la Privacidad, la Familia, el Hogar o la Correspondencia

La ley contiene disposiciones contra la penetración arbitraria del hogar excepto cuando la policía está en proceso de perseguir a un sospechoso o cuando se apresa a un sospecho en el acto de cometer un crimen. Aunque toda otra penetración del hogar requiere que un juez emita una orden de arresto o cateo, la policía realizaba allanamientos e incautaciones ilegales. El Comité Dominicano de Derechos Humanos reportó que policías llevaron a cabo allanamientos en residencias privadas en muchos barrios pobres de Santo Domingo.

Aunque el gobierno negaba el uso de intervención electrónica no autorizada y otros métodos subrepticios de interferir con la vida privada de personas y familias, grupos de derechos humanos alegaron una continua interferencia. Había una industria activa de intervención ilegal privada.

#### Sección 2 Respeto a las Libertades Civiles, Incluyendo:

##### a. La Libertad de Expresión y de la Prensa

La ley dispone la libertad de expresión y de la prensa, y en la práctica el gobierno respetaba estos derechos en sentido general. Por lo general personas o grupos podían criticar al gobierno de manera pública y privada sin represalia.

Los periódicos y las revistas presentaban una variedad de opiniones y críticas. Había ocho periódicos diarios, varios periódicos semanales, y varios sitios en-línea de noticias. Los directores a veces practicaban la auto-censura, sobre todo cuando una cobertura podría tener un efecto adverso sobre los intereses económicos o políticos de los dueños de los medios.

Había muchas estaciones de radio y televisión de propiedad privada, transmitiendo una amplia variedad de opiniones políticas. El gobierno controlaba una estación de televisión. Se permitía que los medios internacionales operaran libremente.

En febrero un editorial en un periódico de circulación limitada alegó que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) operado por el gobierno había suspendido dos programas de televisión por haber criticado un proyecto del gobierno para la construcción de un tren subterráneo. Indotel negó dicha alegación.

Hubo reportes ocasionales de hostigamiento de periodistas. En febrero dos agentes de la Policía Metropolitana de Tránsito golpearon a dos fotógrafos después de que alegadamente éstos habían pasado un semáforo en rojo. Según testigos, la policía de tránsito usó fuerza innecesaria cuando un periodista intentó tomar fotos del arresto de sus colegas.

No hubo restricciones gubernamentales sobre el Internet ni la libertad académica.

b. Libertad de Reunión y Asociación Pacífica

Libertad de Reunión

La ley dispone la libertad de reunión, pero las marchas y reuniones públicas al aire libre requieren permisos, que normalmente son concedidos por el gobierno. A veces, cuando los miembros de la policía utilizaban la fuerza para deshacer demostraciones espontáneas, causaron muertes y lesiones, tanto a los que protestaban como a los testigos. En agosto la policía hirió a por lo menos 10 protestantes en Nagua que pedían la construcción de una infraestructura básica para la ciudad. También mataron a un transeúnte quien recibió un tiro en la cabeza cuando la policía comenzó a tirar hacia los amotinados.

Libertad de Asociación

La ley dispone la libertad de asociación, y en sentido general el gobierno ha respetado este derecho en la práctica.

c. Libertad de Cultos

La ley dispone la libertad de cultos, y en la práctica el gobierno ha respetado esta libertad en sentido general. La ley prohíbe la discriminación sobre la base de la religión, y muchas religiones y denominaciones llevan una vida activa.

La Iglesia Católica disfrutaba de privilegios especiales no concedidos a otras religiones, bajo los términos de un concordato. Por ejemplo, el Cardenal posee el rango de un oficial general militar, y hay una capilla católica en el palacio presidencial. La Iglesia Católica también ha recibido fondos públicos para cubrir algunos gastos de la iglesia tales como la rehabilitación de facilidades de la misma.

Abusos Sociales y Discriminación

Las relaciones entre las diferentes congregaciones religiosas eran armoniosas, y en sentido general la sociedad era tolerante con respecto a asuntos religiosos. Sin embargo, ya que los católicos disfrutaban de algún tratamiento especial, existe algo de resentimiento entre los grupos no-católicos hacia los católicos.

La comunidad judía es muy pequeña, y no hubo reportes de actos anti-semíticos.

Para una discusión más detallada, ver el *2005 International Religious Freedom Report*.

d. Libertad de Movimiento dentro del País, Viaje al Extranjero, Emigración y Repatriación

Aunque la ley dispone estos derechos, y en la práctica el gobierno respetaba estas disposiciones, hubieron algunas excepciones. Por ejemplo, grupos de derechos humanos alegaban que a muchos haitianos no se les permitía abandonar los bateyes donde trabajaban (ver la sección 6.3.). Grupos locales e internacionales de derechos humanos alegaban que existía discriminación contra inmigrantes haitianos, y que éstos estaban sujetos a acciones arbitrarias e injustificadas por parte de las autoridades (ver la sección 5).

La ley prohíbe el exilio forzado, y no hubo reportes de su uso.

Los haitianos seguían inmigrando al país en grandes números en búsqueda de oportunidades económicas, y muchos de ellos fueron repatriados. Autoridades de migración y de las fuerzas de seguridad llevaban a cabo redadas periódicas durante el año para ubicar y repatriar a los inmigrantes ilegales. Algunos de los haitianos sacados del país reportaron que se les negó la oportunidad de demostrar que eran residentes legales, hacer arreglos para sus familias o bienes, o de expresar un temor creíble de persecución o tortura en el caso de que fueran devueltos a Haití. A veces oficiales de migración y fuerzas de seguridad destruían y confiscaban los documentos de residencia de los expulsados. En algunos casos expulsados con documentos legales vigentes recibieron permiso para volver. Oficiales gubernamentales declararon que el Presidente Fernández ordenó la suspensión de las “repatriaciones masivas” en junio.

La constitución dispone que todo el que nace en el país es ciudadano, con la excepción de aquellas personas en tránsito o hijos de diplomáticos. ONG’s defensoras de los haitianos reportaron que a niños nacidos de padres haitianos en el país muchas veces se les negaba la posibilidad de registrarse como ciudadanos bajo la excepción de tránsito, aún cuando sus padres habían residido en el país durante largos períodos (ver la sección 5). En diciembre la Suprema Corte emitió un fallo declarando que la condición de “en tránsito” se aplicaba a los hijos de inmigrantes ilegales.

La política del gobierno era de cumplimiento estricto de los requisitos de documentación y la repatriación de individuos que carecieran de documentos. Sin embargo, la ejecución de la política fue selectiva y afectada por la dependencia de mano de obra haitiana para ciertos tipos de trabajos mal pagados, en la agricultura y la construcción. Oficiales militares y otros actuaron con discreción, y muchos cobraban sobornos con regularidad a cambio de liberar a personas sospechosas de estar indocumentada o en una situación irregular.

### Protección de Refugiados

La ley otorga el asilo o la condición de refugiado de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas del 1951, relativa a la Condición de Refugiados y su protocolo del 1967, pero el gobierno no ha creado un sistema para brindarles protección a los refugiados. En la práctica el gobierno ofrecía alguna protección contra el *refoulement*, la devolución de personas a un país donde temían la persecución. Esta protección generalmente se aplicaba a personas que lograran acceso al proceso de refugiado y a quienes se les había emitido constancia de que eran refugiados, o que tenían solicitudes pendientes. Sin embargo, el gobierno no aplicaba los estándares establecidos en el acuerdo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR), para mejorar la aceptación y la adjudicación de la solicitud de condición de

refugiados. Aunque el UNHCR fortaleció sus actividades de protección en el 2003 reestableciendo su presencia en Santo Domingo, en julio el UNHCR retiró a su personal y posteriormente monitoreaba asuntos migratorios y de refugiados desde una oficina regional fuera del país.

La solicitud de condición de de refugiado debe ser referida por la Oficina Nacional de Refugiados en la Dirección de Migración, al Subcomité Técnico de la Comisión Nacional para Refugiados, presidido por la Cancillería. El subcomité tiene la responsabilidad de hacer recomendaciones a la comisión, integrada por miembros de la Cancillería, del DNI, y de la Dirección de Migración. La comisión, con responsabilidad de tomar la decisión definitiva sobre la solicitud, incluye a tres miembros del subcomité, el consultor jurídico del poder ejecutivo y miembros de la Policía Nacional, la Secretaría de Trabajo, y la Procuraduría General.

Para octubre la Dirección de Migración reportó unas 267 solicitudes pendientes de decisión, casi todas de haitianos. Algunos de estos casos estaban pendientes desde el 2000. En abril la Comisión Nacional para Refugiados revisó y concedió asilo en cinco casos, de los cuales tres fueron sometidos por miembros de una misma familia. Esta fue la primera reunión del comité en 10 años. Según el UNHCR, en el país vivían cerca de 600 refugiados reconocidos, muchos de los cuales carecían de documentación suficiente para obtener un permiso para trabajar legalmente y ejercer otros derechos, como la obtención de documentación para sus hijos.

La Unión de Refugiados Haitianos en la República Dominicana declaró que las autoridades regularmente emitían a los haitianos que solicitaban asilo, un documento de migración, que los solicitantes debían renovar cada dos meses. El documento costaba aproximadamente US\$8 dólares (250 pesos), cuota que se cobra con cada renovación. La organización consideraba que el documento era inservible porque hasta los haitianos que lo portaban eran arrestados y repatriados.

### Sección 3 Respeto a los Derechos Políticos: El Derecho del Ciudadano a Cambiar de Gobierno

La ley dispone que los ciudadanos tienen el derecho a cambiar su gobierno de manera pacífica, y en la práctica los ciudadanos ejercían este derecho a través de elecciones periódicas, libres y justas celebradas sobre la base del sufragio casi universal. Personal activo de la policía y militares no pueden votar ni participar en actividades políticas partidistas.

#### Elecciones y Participación Política

En el 2004, el candidato del PLD Leonel Fernández, ganó la presidencia en unas elecciones que fueron descritas como generalmente libres y justas por la Organización de Estados Americanos, el Instituto Nacional Demócrata, y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, además de la Junta Central Electoral y la organización no-gubernamental (ONG) Participación Ciudadana.

Por ley los partidos deben reservar en sus boletas un 33 por ciento de las posiciones para las mujeres, en sus boletas de candidatos a la Cámara de Diputados y cabildos; en la práctica los

partidos muchas veces colocaban a las mujeres en posiciones tan bajas en la boleta, que su elección era difícil o imposible. Las mujeres ocupaban tres posiciones en el gabinete del gobierno de Fernández. Había 2 mujeres en el Senado, que tiene 32 miembros, 24 mujeres en la Cámara de Diputados de 150 miembros, y 5 mujeres en la Suprema Corte que tiene 16 asientos.

### Corrupción Gubernamental y Transparencia

Hubo reportes y una percepción generalizada de corrupción en el gobierno. Las autoridades presentaron cargos contra varios funcionarios del gobierno anterior y personas que habían hecho negocios con ellos, y las cortes condenaron a varios de ellos.

En abril el Presidente designó una Comisión de Ética y Anti-Corrupción en el Gobierno, con autoridad para recibir denuncias de corrupción dentro del gobierno y canalizar las quejas a las oficinas con autoridad investigativa.

En el 2004 el Congreso aprobó y el Presidente promulgó una ley comprensiva que disponía el acceso público a la información del gobierno. Esto permite límites sobre la disponibilidad de información pública únicamente bajo circunstancias específicas (tales como la protección de la seguridad nacional) y dispone una pena de seis meses hasta dos años de prisión, y un impedimento de cinco años de sustentar cargos públicos para oficiales del gobierno que obstruyan el acceso a la información pública. Un tribunal puede revisar la decisión de una agencia de negar el acceso a la información.

En septiembre el Congreso ratificó un acuerdo de libre comercio que requiere medidas para prevenir la corrupción en asuntos comerciales y para mejorar la transparencia en las adquisiciones gubernamentales.

### Sección 4 Actitud del Gobierno Respecto a la Investigación Internacional y No-Gubernamental de Alegadas Violaciones de Derechos Humanos

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos operaban sin restricciones del gobierno, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. En sentido general los oficiales del gobierno cooperaban y respondían a sus opiniones.

Los principales grupos locales incluían al Comité Dominicano de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Instituto Santo Domingo de Derechos Humanos. También había varias organizaciones más pequeñas, tanto seculares como religiosas, que abordaban, entre otras cosas, los derechos de la mujer, asuntos laborales, y los derechos de los haitianos.

Aunque una ley del 2001 creó la oficina del defensor público (*ombudsman*) de derechos humanos, con autoridad sobre problemas del sector público que involucran a los derechos humanos, el medio ambiente, asuntos de la mujer, temas de la juventud, y protección al consumidor, la selección de un defensor público seguía pendiente al finalizar del año.

### Sección 5 Discriminación, Abusos Sociales y Trata de Personas

Aunque la ley prohíbe la discriminación basada en raza y género, existía dicha discriminación, y el gobierno pocas veces reconocía su existencia ni hacía esfuerzos por combatirla.

## La Mujer

La violencia doméstica seguía siendo un problema serio. Bajo la Ley contra la Violencia Doméstica, el estado puede perseguir la violación, el incesto, la agresión sexual y otras formas de violencia doméstica. Las penas por estos crímenes varían entre uno y 30 años de prisión y se aplican multas que van desde aproximadamente US\$20 hasta US\$7 mil (600 a 210 mil pesos). Varios artículos de periódico alegaban que la sociedad se había vuelto más violenta, y muchos funcionarios del gobierno y ONG's denunciaron el problema públicamente. Sin embargo, la falta de conocimiento y entrenamiento de la policía, los fiscales y los investigadores dificultaba la acción contra crímenes de violencia doméstica (además de otros tipos de crimen). Una ONG local estimó que el 24 por ciento de las mujeres entre las edades de 15 y 49 años habían sido víctimas de abuso físico. Según la Secretaría de la Mujer, de enero a julio, 94 mujeres fueron asesinadas en "crímenes pasionales" por sus cónyuges o amantes, en comparación con 117 víctimas de ese tipo en todo el 2004.

La Secretaría de la Mujer, además de varias ONGs, realizó programas de acercamiento sobre violencia doméstica y derechos legales. El Departamento de la No-Violencia de la Secretaría de la Mujer recibió aproximadamente 388 quejas de violencia doméstica durante el año.

Víctimas femeninas de abuso contaban con pocos recursos, aunque la ONG Piedra Blanca operaba un albergue para mujeres golpeadas, y la Secretaría de la Mujer apoyaba la operación de un centro para víctimas de la violencia doméstica en Baní, donde las víctimas del abuso podrían depositar un reporte a la policía y recibir asesoría. En agosto la Procuraduría General creó la Dirección Nacional de Asesoría para Víctimas, que coordina esfuerzos de las instituciones oficiales y no-gubernamentales que brindan servicios a las víctimas de la violencia, incluyendo el abuso doméstico y sexual.

La violación constituía un problema grave y ampliamente sub-reportado. Las penas por haber cometido violación van de 10 a 15 años de prisión (o 10 a 20 años en caso de violación contra una persona vulnerable o bajo otras circunstancias egregias) y una multa de aproximadamente 3,300 a US\$6,600 (100 mil a 200 mil pesos). El estado puede perseguir a un sospechoso por violación aún cuando la víctima no presente cargos, y las víctimas de la violación pueden presentar cargos contra su cónyuge. En el 2002, el último año que se compilaron estadísticas oficiales, la Secretaría de la Mujer reportó más de 3,300 denuncias de abuso sexual. Muchas veces las víctimas no reportaban casos de violación debido al temor de ser estigmatizadas socialmente, además de la percepción de que la policía y la judicatura no garantizarían un remedio. La policía era renuente a manejar casos de violación y muchas veces desalentaba a las víctimas a que pidieran asistencia a las ONGs.

La prostitución es legal, aunque hay algunas prohibiciones contra el sexo con menores de edad, y es ilegal que un tercero se beneficie económicamente de la prostitución. Sin embargo, normalmente el gobierno no hace cumplir las leyes contra la prostitución. El turismo sexual

constituía un problema serio en Sosúa y Boca Chica. Grupos de derechos humanos reportaron prostitución continua en bateyes y zonas aledañas a la capital. ONGs condujeron programas sobre la prostitución y la explotación sexual infantil para trabajadores hoteleros y de las zonas industriales, prostitutas y prostitutos, y otros grupos de alto riesgo. La trata de mujeres y niños era un problema (ver la sección 5, Trata).

La ley prohíbe el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, el que se considera un delito y lleva la posibilidad de una pena de 1 año de prisión con multa hasta US\$333 (10 mil pesos); sin embargo, líderes sindicales reportaron que no se hacía cumplir la ley, y el hostigamiento sexual constituía un problema.

Aunque la ley dispone el mismo estatus legal para la mujer que el hombre, en la práctica las mujeres experimentaban discriminación. Tradicionalmente las mujeres no han disfrutado igualdad de condiciones sociales y económicas, ni de las mismas oportunidades que los hombres, y en todos los sectores los hombres ocupaban la mayoría de las posiciones de liderazgo. En muchos casos a las mujeres se les pagaba menos que a los hombres en trabajos de igual contenido y que requerían el mismo nivel de destreza. Algunos empleadores alegadamente administraban pruebas de embarazo a las mujeres antes de contratarlas, como parte de un examen médico obligatorio. Líderes sindicales reportaban que mujeres embarazadas muchas veces no eran contratadas, y que empleadas que salían embarazadas muchas veces eran despedidas. No hubo ningún programa efectivo del gobierno para combatir la discriminación económica contra la mujer.

## Niños

El gobierno declaró su compromiso con los derechos y el bienestar del niño e intentó aumentar la protección de menores, enfatizando la eliminación de la mano de obra infantil. El Código del Menor, implementado en octubre del 2004, estableció el Consejo Nacional de Niños y Adolescentes (CONANI) como agencia pública descentralizada no-ministerial, para coordinar la política pública para proteger los derechos humanos del menor y para administrar el código. A pesar de que la ley dispone que CONANI debe recibir por lo menos un 2 por ciento del presupuesto nacional y que un mínimo de un 5 por ciento de los presupuestos de los gobiernos municipales deben ser dedicados a proyectos a beneficio de la niñez, este requisito no se ha cumplido.

La educación es gratuita, universal y obligatoria para todo menor hasta el octavo curso, pero los mecanismos legales disponen solamente la educación primaria, lo que fue interpretado para abarcar hasta el cuarto curso. Aunque la Secretaría de Educación reportó una tasa de inscripción de un 97 por ciento en los cursos del 1ro. al 8vo. en el 2004, un estudio del gobierno también estimó que el nivel promedio de curso logrado por niños en las escuelas públicas era de un quinto curso en zonas rurales, y un sexto curso en zonas urbanas. Los niños de descendencia haitiana, y los hijos de ciudadanos indocumentados, experimentaron dificultades para lograr que los aceptaran en los colegios debido a su falta de estado legal (ver la sección 5, Minorías Nacionales/Raciales/Etnicas).

Hubo varios programas gubernamentales que brindaban cuidados médicos a niños en hospitales públicos, pero dichos programas, además de todo otro programa médico, enfrentaban graves limitaciones presupuestarias.

El abuso de menores, incluyendo el abuso físico, sexual y psicológico, constituía un grave problema. Según un empleado de CONANI, la Fiscalía del Distrito de Santo Domingo recibió hasta 25 reportes diarios de abuso infantil. CONANI afirmó que 3 de cada 10 niños en Santo Domingo había sido abusado sexualmente. Pocos de estos casos llegaban a los tribunales debido al temor a la vergüenza familiar, a la falta de recursos económicos, o a la falta de conocimiento respecto a la asistencia legal disponible. La Fiscalía del Distrito Nacional reportó que en un 85 por ciento de los casos de abuso, el acusado era una persona cercana al niño, como por ejemplo miembro de la familia, o un amigo íntimo de la familia. La ley dispone la remoción de un niño maltratado a un ambiente de protección.

En Febrero CONANI le pidió al procurador general que llevara a cabo una investigación de Hogar Luby, un hogar para niños discapacitados en Santo Domingo, basándose en alegatos de abuso infantil, negligencia, y malversación de fondos. Para septiembre el propietario de la casa se había escondido, y la investigación estaba inactiva.

En un caso altamente publicitado en octubre del 2004, 12 personas fueron acusadas de haber abusado sexualmente de por lo menos 29 niños jóvenes en un albergue en Higüey. Fueron mantenidos en detención preventiva y en marzo dos de los acusados murieron en el incendio en la cárcel de Higüey (ver la sección 1.c.). En julio un juez de instrucción desestimó los cargos, y el procurador general apeló el descargo. Para final del año seis de los acusados estaban libres bajo fianza, uno se había muerto de un paro cardíaco, y los tres sospechosos restantes seguían detenidos a la espera del desenlace de la apelación.

Según los monitores locales, los casos de abuso infantil fueron sub-reportados debido a las creencias tradicionales de que los problemas familiares deben ser tratados dentro del seno de la familia. La ley contiene disposiciones fortalecidas contra las áreas problemáticas de abuso infantil, incluyendo el maltrato físico y emocional, la explotación sexual, y la mano de obra infantil (ver las secciones 5, Trata y 6.d.). La ley dispone penas de entre dos y cinco años de prisión y una multa de tres a cinco veces el sueldo mínimo mensual para aquellas personas declaradas culpables del abuso de un menor. La pena se duplica si el abuso está relacionado a la trata.

La trata y la explotación sexual de menores dentro del país constituían un problema, sobre todo en los destinos turísticos populares (ver la sección 5, Trata). Niñas y niños adolescentes de familias pobres a veces eran incentivados a realizar actos sexuales mediante la promesa de alimentos o ropa.

La mano de obra infantil constituye un grave problema en el sector informal de la economía (ver la Sección 6.d.).

Trata de Personas

Aunque la ley prohíbe la trata de personas, hubo reportes de que mujeres y niños eran traficados desde, hacia y dentro del país.

La ley incluye penas de 15 a 20 años de prisión para los traficantes y una multa de hasta 175 veces el sueldo mínimo mensual. El Código de Menores dispone penas para el abuso sexual de niños, de 20 a 30 años de prisión y multas de 100 a 150 veces el sueldo mínimo.

La unidad contra la trata de personas de la procuraduría coordinaba la investigación y persecución de casos de trata. Unidades de la Policía Nacional, Dirección de Migración, y la Procuraduría General se enfocaron en la trata de personas, igual que el Comité Inter-institucional para la Protección de la Mujer Inmigrante. La Dirección de Migración creó un departamento contra la trata, que coordina con la Procuraduría General y la Policía Nacional para encontrar y enjuiciar a personas dedicadas a la trata de mujeres para la prostitución y explotación sexual comercial.

La Organización Internacional de Migración (IOM) estimó que unas 50 mil mujeres dominicanas trabajaban en la prostitución alrededor del mundo, y de estas mujeres, la tercera parte eran víctimas del tráfico. Los principales destinos eran países de Europa, el Caribe, y Latinoamérica, incluyendo Argentina, Australia, Austria, Brasil, Costa Rica, Alemania, Grecia, Italia, los Países Bajos, Panamá, España, San Martín, y Suiza. Japón se convirtió en un nuevo destino del tráfico, mientras que los traficantes en el Caribe fortalecieron sus redes. Mujeres de 18 a 25 años tenían el mayor riesgo de ser traficadas. Muchas víctimas eran madres solteras sin educación, desesperadas por mejorar las condiciones de vida de sus hijos.

Dentro del país, principalmente en las zonas turísticas, la prostitución de menores, constituía un problema. Un estudio oficial del 2003 estimaba que de 50 a 60 niños haitianos eran traficados al país cada semana, y que muchas niñas haitianas de 12 años y mayores eran traídas al país para trabajar como prostitutas.

En abril el DNI desmanteló una red de prostitución y pornografía infantil en Sosúa, que había colocado en el Internet fotografías sexualmente explícitas de niños y niñas. La policía arrestó a dos hombres. A solicitud del procurador general, la policía cerró a varias barras, clubes nocturnos y “salones de masaje” en Santiago, Santo Domingo, y Boca Chica, que eran usados para la prostitución infantil y la explotación sexual de mujeres.

En mayo un juez condenó y sentenció a tres hombres a 15 años de prisión bajo la ley anti-tráfico por explotar sexualmente a 24 niños y niñas en Boca Chica en el 2004. En octubre un cuarto sospechoso estaba detenido a la espera de ser juzgado.

Las ONGs estimaron que había cientos de redes de tráfico y trata de indocumentados que operaban dentro del país. Según el Centro ONG para Orientación e Investigación Integrales (COIN) y la IOM, típicamente las organizaciones de tráfico estaban compuestas por grupos pequeños. Individuos en el país reclutaban a las personas que serían traficadas y obtenían documentos de identificación y para viaje. Los traficantes frecuentemente eran presentados a las mujeres a través de amigos y parientes; ellos les prometían alguna clase de empleo, obtenían documentos falsos o legítimos para las mujeres, y muchas veces retenían sus pasaportes una vez

éstas estaban en el país de destino. Organizaciones de traficantes alegadamente recibían entre US\$5 mil y US\$8 mil (150 mil pesos a 240 mil pesos) por traficar a una mujer para fines de prostitución.

Algunos elementos dentro de la industria turística facilitaban la explotación sexual de niños. Zonas particularmente problemáticas eran Boca Chica, Puerto Plata, y Sosúa. Europeos en el extranjero comercializaban giras sugiriendo que se podían encontrar a niños y niñas como compañeros sexuales.

En marzo la Suprema Corte reinició el proceso en el juicio contra el Diputado Guillermo Radhamés Ramos García (antiguo cónsul en Cabo Haitiano, Haití) bajo cargos de tráfico de indocumentados. Debido a la condición de Ramos García como diputado, el caso fue asignado directamente a la Suprema Corte. La Suprema Corte declaró culpable a Ramos y lo sentenció a 18 meses de prisión. Fue puesto en libertad condicional en octubre después de haber cumplido nueve meses y ocho días de su sentencia, y su sentencia correspondió al período que ya había cumplido en la cárcel. Dos co-acusados fueron declarados culpables y sentenciados a la condena cumplida.

El gobierno hizo esfuerzos por investigar, destituir y enjuiciar cuando procedía a oficiales públicos que facilitaran, condonaran o fueran cómplices en actividades de tráfico de inmigrantes o trata de humanos. Las ONGs alegaban corrupción entre los militares y oficiales de migración asignados a puestos fronterizos, y notaban que estos oficiales a veces facilitaban el tránsito ilegal de trabajadores haitianos al país para trabajar en plantaciones de caña y en el sector de la construcción (ver las secciones 2.d. y 6.c.). También hubo elementos dentro de la Dirección de Migración y la Policía Nacional que organizaban o facilitaban el tráfico de indocumentados a través de los aeropuertos internacionales.

El gobierno brindó asistencia limitada a víctimas del tráfico trabajando con ONGs para desarrollar programas de capacitación laboral para mujeres repatriadas. Cuando personas traficadas eran repatriadas desde el extranjero, se les asignaba un registro de control que se registraba en su expediente policial oficial y eran entrevistadas por un inspector de migración. Según el COIN, la mayoría de las víctimas se sentían demasiado avergonzadas o asustadas para buscar acción legal contra los traficantes, y las víctimas no recibían ninguna asesoría legal. COIN trabajó para desarrollar relaciones con embajadas y consultados que dan servicios a las víctimas traficadas, y con otras ONGs en países de destino que sirven a poblaciones similares. Varios albergues administrados por iglesias brindaban refugio a niños que escapaban de la prostitución.

COIN y la IOM aconsejaban a mujeres que pensaban aceptar ofertas de trabajo en Europa y la parte oriental del Caribe, acerca de problemas de migración, salud y otros, incluyendo los peligros del tráfico, prostitución forzada, y el trabajo forzado doméstico. COIN administraba el Centro de Información de Salud y Migración para Mujeres Migrantes, que llevaba campañas de educación comunitaria a zonas de alto riesgo sobre varios temas, incluyendo la ciudadanía, requisitos de trabajo legal, peligros del tráfico, prostitución forzada, y servicio doméstico forzado. Con el apoyo de la IOM, COIN también brindaba un nivel mínimo de servicios clínicos y clases de educación para adultos a las mujeres repatriadas.

## Personas Discapacitadas

Aunque la ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades, ellos encontraron discriminación en el empleo y en la prestación de otros servicios. A pesar de que la ley dispone el acceso físico a todo nuevo edificio público y privado para personas con discapacidades, las autoridades no hacen cumplir esta ley. La Asociación Dominicana de Rehabilitación, que cuenta con 17 sucursales alrededor del país, recibe un subsidio de la Secretaría de Salud Pública para brindar asistencia de rehabilitación a personas con discapacidades. Poco esfuerzo se hizo para diseñar obras públicas que acogieran a personas con discapacidades.

Era común la discriminación contra personas que sufren de enfermedades mentales, y se dedicaron pocos recursos a los enfermos mentales.

CONANI denunció que un hogar para niños discapacitados estaba abusándolos y descuidándolos. En octubre las autoridades estaban investigando el caso (ver la sección 5, Niños y Niñas).

## Minorías Nacionales/Raciales/Etnicas

Había prejuicio racial que apuntaba a personas de tez oscura, pero el gobierno hizo poco por abordar el problema. Como resultado, eran frecuentes los actos de discriminación, que iban desde lo ratero hasta lo grave. De manera particular hubo fuertes prejuicios contra haitianos, lo que perjudicaba a muchos haitianos y dominicanos de descendencia haitiana, igual que otros extranjeros de piel oscura (ver las secciones 1.d, y 2.d.). Pocos oficiales gubernamentales reconocían la existencia de esta discriminación; otros de manera regular y pública alegaban que no había discriminación contra los haitianos, ni contra otras personas de piel oscura.

Esfuerzos de las autoridades por frenar el flujo de inmigrantes ilegales haitianos hizo la vida más difícil para aquellos haitianos que ya vivían en el país de manera legal. Las regulaciones policiales permiten la incautación de vehículos que brindan transporte a inmigrantes ilegales, desincentivando así a los taxistas y choferes de autobús de recoger a personas de piel oscura. En redadas dirigidas a inmigrantes ilegales, las autoridades recogían y expulsaban a dominicanos oscuros además de residentes haitianos legales (ver la sección 1.d.).

La IOM estimaba que aproximadamente 650 mil inmigrantes haitianos – o un 7.5 por ciento de la población del país – vivía en bateyes o campos de trabajo en los cañaverales, ambientes duros con poca o ninguna electricidad, normalmente sin agua potable, y sin escuelas adecuadas. Aunque algunos haitianos eran traídos al país específicamente para trabajar en los cañaverales, muchos carecían de documentos. Las ONGs de derechos humanos, la Iglesia Católica, y activistas describían las condiciones de vida de los haitianos en los bateyes como una esclavitud moderna. En la mayoría de los bateyes, la asistencia médica era rudimentaria o no estaba fácilmente disponible. El alojamiento en los bateyes era pobre; muchas personas dormían en barracones en camas de hierro sin colchones o en pisos de tierra. Muchas familias de 5 personas o más compartían una vivienda midiendo poco menos que 10 por 9 pies. Las facilidades sanitarias, donde existían, generalmente eran anti-higiénicas, y las facilidades para cocinar

normalmente eran improvisadas. La disponibilidad de alimentos frescos, incluyendo frutas y vegetales, estaba seriamente limitada. Muchas veces no se disponía de agua limpia.

Algunas personas estimaban que hasta un millón de haitianos vivían en el país, muchos como ilegales, pero varias ONGs de derechos de los haitianos estaban preocupadas de que este estimado incluía a haitianos nacidos en Haití y a sus hijos nacidos en la República Dominicana. Autoridades del registro civil regularmente se negaban a reconocer y documentar como ciudadanos a muchas personas de descendencia haitiana nacidos en el país (ver la sección 2.3.). Ya que muchos padres y madres haitianos nunca tuvieron documentación de sus propios nacimientos, no podían demostrar su propia ciudadanía ni la de sus hijos.

El 8 de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el gobierno en un caso incoado a nombre de dos niñas dominicanas de descendencia haitiana a quienes los registradores gubernamentales se habían negado a proporcionar certificados de nacimiento. Las partes demandantes habían presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 1998, y cuando fracasó la mediación para lograr una solución amigable en el 2001, incluyendo cambios de leyes y procedimientos, la comisión refirió el caso al tribunal. Una nota de prensa de fecha 12 de diciembre citó al canciller diciendo que aunque el veredicto contra el país era injusto, el país pagaría según lo ordenado por la corte.

Aunque una ordenanza legal permite que niños indocumentados asistan a la escuela hasta el quinto curso, algunos administradores de escuelas negaban a los niños indocumentados el acceso a las escuelas, particularmente a aquellos que parecían ser de descendencia haitiana. ONGs reportaron que a niños haitianos indocumentados se les impedía inscribirse en la escuela en mayor grado que los niños dominicanos igualmente indocumentados.

Cuando se les permitía asistir a la escuela primaria, los niños de padres pobres haitianos, igual que los niños dominicanos pobres en los mismos bateyes, raramente progresaban más allá del sexto curso.

### Otros Abusos Sociales y Discriminación

Personas con VIH/SIDA, sobre todo mujeres, confrontaban discriminación en el lugar de trabajo y otros lugares. Se estima que unas 50 mil a 100 mil personas en el país han sido infectadas con el mal. Según Human Right Watch, trabajadores en muchas industrias enfrentan pruebas involuntarias de VIH en el lugar de trabajo o cuando procuran cuidados médicos o seguro médico. Cuando se descubría que un trabajador o paciente tenía la enfermedad, podía ser despedido de su trabajo o se le podía negar cuidados adecuados de salud. Aunque la ley prohíbe el uso de pruebas VIH para depurar a empleados o para servicios médicos no relacionados a la enfermedad, raras veces se hace cumplir esta ley.

## Sección 6 Derechos Laborales

### a. Derecho de Asociación

La ley dispone la libertad de organizar sindicatos laborales, y todo trabajador, con la excepción de los militares y la policía, tenían la libertad de formar y hacerse miembros del sindicato de su preferencia. Los trabajadores organizados representaban un estimado 8 por ciento de la fuerza laboral. La ley dispone el reconocimiento automático de un sindicato si el gobierno no actúa sobre su solicitud dentro de un plazo de 30 días.

Aunque la ley prohíbe que la empresa despidiera a organizadores sindicales o miembros de sindicatos, su cumplimiento era inconsistente, y las penalidades eran insuficientes para impedir que los empleadores violaran los derechos de los trabajadores. Hubo reportes adicionales de hostigamiento e intimidación por parte de empleadores en un esfuerzo por evitar actividades sindicales, sobre todo en las zonas francas industriales (FTZs) (ver la sección 6.b.). La Federación Dominicana de Trabajadores de Zonas Francas (FEDOTRAZONAS) reportó incidentes adicionales de actividades anti-sindicales en la compañía FM en Santiago, una de las trece facilidades de producción propiedad de la empresa de manufactura de ropa Grupo M, uno de los empleadores más grandes del sector privado del país. La gerencia de la empresa FM llevó a cabo una campaña pública contra organizadores y filiales sindicales, que incluía la creación de un sindicato rival que favorecía las políticas de la empresa. En octubre estaba pendiente un fallo sobre la legalidad de este grupo.

#### b. Derecho a Organizarse y a Pactos Colectivos

La negociación colectiva es legal y debe ser utilizada en empresas donde un sindicato haya logrado el apoyo de una mayoría absoluta de los trabajadores. Pocas empresas tienen pactos colectivos, y la Organización Internacional de Trabajo (ILO) consideraba los requisitos para derechos de negociación colectiva como excesivos y un impedimento a la negociación colectiva.

La ley establece un sistema de tribunales laborales para tratar disputas. Mientras que sí procedían casos a través de los tribunales laborales, el proceso muchas veces era largo y los casos seguían pendientes durante varios años.

La ley dispone el derecho de la mayoría de los trabajadores a la huelga (y el derecho de empleadores del sector privado a prohibir la entrada a trabajadores), pero las huelgas formales no eran frecuentes. Los requisitos formales de una huelga incluyen el apoyo de una mayoría absoluta de todos los trabajadores de una compañía, ya sea sindicalizada o no, un intento previo de resolver el conflicto a través de la mediación, notificación escrita a la Secretaría de Trabajo, y un período de espera de 10 días a partir de la notificación antes de proceder con la huelga.

No se permite que trabajadores del gobierno y personal de servicios públicos esenciales hagan huelga. A pesar de esta prohibición, médicos empleados por el gobierno miembros de la Asociación Médica Dominicana hicieron huelga repetidamente durante el 2004 y el primer semestre de este año por períodos que variaban de un día hasta una semana, insistiendo en aumentos salariales y mayores recursos para los hospitales del gobierno. El secretario de salud y eventualmente el Presidente se vieron involucrados en estas negociaciones laborales. El gobierno no propuso ninguna sanción contra los que habían hecho caso omiso la prohibición legal contra huelga. En octubre el Presidente y el secretario de salud firmaron un acuerdo con el presidente de la Asociación Médica Dominicana, comprometiéndose, entre otras cosas, a

disponer aumentos salariales en el 2007. El acuerdo cumplió las principales demandas de la asociación.

Unos cuantos sindicatos representaban a un reducido número de trabajadores haitianos, quienes están cubiertos por el Código Laboral sin importar su condición legal. Varias ONGs reportaron que la mayoría de los trabajadores haitianos en las industrias azucarera y de la construcción no ejercían sus derechos por temor a ser deportados o a perder su empleo.

El Código Laboral se aplica en las 40 zonas francas establecidas, las cuales empleaban aproximadamente 175 mil trabajadores. Según el Consejo Nacional de Sindicatos Laborales, solamente cuatro de los sindicatos que habían logrado acuerdos de pacto colectivo en las zonas francas estaban activos. Regulaciones sobre el lugar de trabajo y la ejecución de las mismas en las zonas francas no son diferentes a las del país en general, aunque las condiciones laborales a veces eran mejores y el pago ocasionalmente era más alto. El trabajo obligatorio en tiempo extra constituía una práctica común, y a veces se ejecutaba mediante el cierre de puertas o pérdida de sueldo o empleo para los que rehusaban (ver la sección 6.c.).

Hubo reportes de intimidación encubierta generalizada por parte de empleadores en las zonas francas en un esfuerzo por evitar las actividades sindicales (ver la sección 6.a.). Los sindicatos en las zonas francas reportaban que sus miembros eran renuentes a discutir actividades sindicales en el trabajo, aún durante la hora de receso, por temor a perder sus empleos. Algunas compañías de zona franca fueron acusadas de despedir a trabajadores que habían intentado organizarse. La mayoría de los sindicatos en las zonas francas estaban afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores de las Zonas Francas (FENATRAZONAS) o FEDOTRAZONAS (ver la sección 6.a.). FEDOTRAZONAS estimaba que menos de un 10 por ciento de los trabajadores de las zonas francas eran miembros de sindicatos. La resistencia de los empleadores a la organización sindical, sobre todo en las zonas francas, aumentaba como respuesta a la creciente presión competitiva proveniente de compañías de Asia. Observadores de la industria estimaban que como resultado de esta presión, se habían perdido unos 30 mil empleos en el sector.

Muchos de los principales fabricantes en las zonas francas tenían códigos de conducta voluntaria que incluían cláusulas de protección de los derechos laborales y que en sentido general cumplían con la Declaración de ILO sobre los Principios Fundamentales y Derechos al Trabajo. Los trabajadores no siempre conocían dichos códigos ni los principios que éstos contenían.

#### c. Prohibición de Trabajo Forzado o Compulsivo

Aunque la ley prohíbe el trabajo forzado o compulsivo, incluyendo el trabajo infantil, hubo reportes de que habían ocurrido dichas prácticas (ver la sección 5). Algunos niños, sobre todo haitianos, eran “adoptados” por familias y trabajaban bajo una clase de servidumbre obligada (ver la sección 6.d.). También hubo reportes de que a trabajadores en las plantaciones de caña se les impedía abandonar la zona durante la zafra (ver la sección 6.e.).

#### d. Prohibición de Trabajo Infantil y Edad Mínima para Empleo

A pesar de que la ley prohíbe el empleo de menores de 14 años e impone restricciones en el empleo de menores de 16 años, la mano de obra infantil constituía un problema serio. El Departamento de Estadísticas del Banco Central estimaba que alrededor de un 15 por ciento de los niños entre las edades de 14 y 17 años participaban en alguna clase de trabajo. Las regulaciones aplicables a niños entre las edades de 14 y 16 años limitaban a 6 el número de horas de trabajo diario, prohibía el empleo en trabajos peligrosos o en establecimientos que sirven bebidas alcohólicas, y limitaba el trabajo nocturno. Se pueden aplicar multas y sanciones legales a compañías que emplean a menores de edad. A pesar de que el gobierno hacía efectivo el cumplimiento de estas regulaciones, la mano de obra infantil constituía un problema principalmente en el sector informal que escapaba el control regulatorio.

El alto nivel de desempleo general y la falta de un sistema de seguridad social presionaban para que las familias permitieran o incentivaran a los niños a ganarse unos ingresos adicionales. Decenas de miles de niños comenzaron a trabajar antes de cumplir los 14 años de edad. La mano de obra infantil tuvo lugar principalmente en la economía informal, pequeños negocios, fábricas clandestinas, cañaverales, y lugares de prostitución. Las condiciones en las fábricas clandestinas generalmente eran malas, insalubres y muchas veces peligrosas. Hubo evidencia de que adolescentes pobres, tanto haitianos como dominicanos, acompañaban a sus padres a trabajar en los cañaverales, con la aprobación tácita de las compañías azucareras. Niños de 12 años y menos también trabajaban sembrando caña, ganándose hasta US\$1 (30 pesos) por un día completo de trabajo.

Algunas familias pobres haitianas hacían arreglos para que familias dominicanas “adoptaran” y emplearan a sus hijos, con la esperanza de garantizarles un futuro más promisorio. Los padres adoptivos normalmente inscribían al niño como si fuera suyo. A cambio de eso, los padres biológicos recibían un pago económico o alimentos y ropa. En muchos casos los padres adoptivos no trataban a los niños adoptivos como miembros plenos de la familia, y les exigían que trabajaran en las casas o negocios familiares en vez de asistir a la escuela. Esto creaba una clase de servidumbre forzada para los niños y adolescentes.

La Secretaría de Trabajo, en colaboración con el Programa de la ILO para la Erradicación de la Mano de Obra Infantil y otras organizaciones internacionales de derechos laborales, continuaban programas para combatir la mano de obra infantil. Esto incluía programas para eliminar la mano de obra infantil en la provincia de Azua, donde se producen tomates, la provincia cafetalera de San José de Ocoa, y la provincia agrícola de Constanza, y un programa para combatir la explotación comercial sexual de menores en destinos turísticos populares. Las Secretarías de Trabajo y Educación seguían apoyando el Programa Combatiendo la Mano de Obra Infantil a través de la Educación, que estableció varios campamentos que auspiciaban a más de mil niños y adolescentes. Un programa de ILO y la Secretaría de Trabajo en Boca Chica para combatir la explotación sexual comercial de menores brindaba apoyo psicológico y asistencia médica, devolvía a niños a las aulas, y reunía a niños con sus familias y comunidades donde fuera posible. El programa también brindaba asistencia legal a víctimas menores, para arrestar y condenar a los explotadores. La Secretaría de Educación proporcionó un subsidio de US\$17 (500 pesos) mensuales a las familias más pobres para que mantuvieran a sus hijos en la escuela y fuera del trabajo. Las Fuerzas Armadas patrocinaron un programa para rescatar, supervisar, y rehabilitar víctimas de mano de obra infantil o aquellas personas bajo riesgo, y operaba varios

programas ambulatorios y una “villa” permanente que ofrecía alojamiento, comida, y actividades educativas.

No hubo reportes confirmados de mano de obra infantil forzada en el sector formal.

#### e. Condiciones Aceptables de Trabajo

El poder ejecutivo fija niveles de sueldo mínimo para trabajadores del sector público, y el Comité Nacional de Salario fija los niveles para el sector privado, con la excepción de los trabajadores de las zonas francas y las industrias azucarera, hotelera, de la construcción y manufactura de calzados. El salario mínimo mensual era de aproximadamente \$119 (3,561 pesos) en las zonas francas y \$164 (4,920 pesos) fuera de las zonas francas. El sueldo mínimo para el sector público era de aproximadamente \$64 (1,906 pesos) por mes. El sueldo mínimo para trabajadores agrícolas cubiertos por regulaciones de sueldo mínimo era de aproximadamente \$0.43 de dólar por hora (13 pesos), en base a una jornada de 10 horas. El sueldo mínimo nacional no proporcionaba un nivel de vida decente para un trabajador y su familia.

La ley establece un período estándar de trabajo de 44 horas por semana, y estipula que todo trabajador tiene derecho a 36 horas de descanso ininterrumpido cada semana. La ley dispone un pago premium por concepto de sobretiempo, lo que era obligatorio en algunas empresas de zona franca.

En los ingenios, los cortadores de caña normalmente eran pagados según el peso de la caña en vez de las horas trabajadas. Los observadores sospechaban de fraude en algunas estaciones de pesaje, y notaban que los patronos a veces no suplían camiones ni carretas para transportar la caña recién cortada al final de la jornada, haciendo que los trabajadores recibieran una compensación inferior porque así la caña se secaba y pesaba menos. La cantidad de caña que cortaba un bracero variaba, pero muchos cortadores ganaban menos de \$2.50 (75 pesos) por día. Los trabajadores eran pagados quincenalmente con vales que se podían canjear por efectivo solamente en centros que muchas veces quedaban lejos. Los trabajadores que usaban los vales para comprar artículos en tiendas o colmados privados en los ingenios muchas veces tenían que pagar un 10 por ciento de “cargo por servicio.” Sin embargo, a partir de diciembre, a los trabajadores ya no se les pagaba con vales sino directamente en efectivo.

Las condiciones para los trabajadores agrícolas eran malas, sobre todo en la industria azucarera. La mayoría de los bateyes de los ingenios carecían de escuelas, facilidades médicas, agua potable, y sistemas de aguas negras, y sufrían de elevadas tasas de enfermedades. Las viviendas proporcionadas por las empresas no cumplían los estándares mínimos (ver la sección 5). Aproximadamente un 83 por ciento de los trabajadores de la caña eran haitianos o de descendencia haitiana. En varios bateyes de los ingenios, se alegaba que los guarda campestres retenían la ropa y los documentos de los trabajadores para evitar que abandonaran su trabajo antes de finalizar de la zafra. Los trabajadores de la caña muchas veces no recibían servicios médicos ni las pensiones que se les debían, a pesar de las deducciones que se habían hecho a su sueldo.

La Diócesis de San Pedro de Macorís desarrolló un borrador de contrato laboral y se lo entregó al Consorcio Vicini y a otras empresas en el 2001. Las empresas no adoptaron el contrato, pero el consorcio siguió mejorando las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de la caña. La Diócesis siguió promoviendo los derechos laborales de los haitianos en los bateyes y procuraban un contrato de trabajo para los trabajadores haitianos. Oficiales de la asociación de industrias azucareras criticaban regularmente al cura que encabezaba este esfuerzo, y los periódicos publicaban alegatos sin fundamento de que éste había alentado a los trabajadores a que destruyeran propiedades.

El Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS) fija las condiciones de seguridad y salud laborales. Tanto el IDSS como la Secretaría de Trabajo contaban con un pequeño cuerpo de inspectores encargados de hacer cumplir los estándares. La Secretaría de Trabajo tenía 185 inspectores activos. Las posiciones de inspector normalmente eran ocupadas mediante el patrocinio político, y los inspectores típicamente aceptaban sobornos de parte de las empresas. Trabajadores se quejaban de que los inspectores no estaban entrenados y no respondían a las quejas sobre salud y seguridad. A pesar de que la ley exige que los empleadores proporcionen un ambiente de trabajo seguro, en la práctica los trabajadores no podían retirarse de situaciones de trabajos peligrosos sin perder sus empleos.